

CONTESTACI3N DE DEMANDA 05001310501820210049600

Adriana Ocampo Maya <adrioca80@hotmail.com>

Mi3 06/07/2022 8:30

Para:

- Juzgado 18 Laboral - Antioquia - Medell3n <j18labmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Señora

JUEZ 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELL3N

Dr. Alba Mery Jaramillo Mej3a

E. S. D.

Referencia

Proceso Ordinario Laboral

Demandante

ADRIANA MARIA OSPINA HENAO
CC. 43662901

Demandado

COLPENSIONES

Radicado

05001310501820210049600

ADRIANA OCAMPO MAYA, abogada, con la cedula de ciudadan3a y tarjeta profesional conforme aparece al pie de mi firma, como abogada sustituta de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES", procedo en el t3rmino de ley a contestar la demanda Ordinaria Laboral.

ADRIANA OCAMPO MAYA

Señora

JUEZ 18 LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Dr. Alba Mery Jaramillo Mejía

E. S. D.

Página | 1

Referencia

Proceso Ordinario Laboral

Demandante

ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

CC. 43662901

Demandado

COLPENSIONES

Radicado

05001310501820210049600

ADRIANA OCAMPO MAYA, abogada, con la cedula de ciudadanía y tarjeta profesional conforme aparece al pie de mi firma, como abogada sustituta de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES", procedo en el término de ley a contestar la demanda Ordinaria Laboral en los siguientes términos:

A LOS HECHOS

PRIMERO: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

SEGUNDO: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

TERCERO: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

CUARTO: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

QUINTO: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

SEXTO: No me consta, corresponde a situaciones propias de otra administradora distinta a Colpensiones.

SÉPTIMO: No me consta, corresponde a situaciones propias de otra administradora distinta a Colpensiones.

OCTAVO: No me consta, corresponde a situaciones propias de otra administradora distinta a Colpensiones.

Página | 2

NOVENO: No me consta, corresponde a situaciones propias de otra administradora distinta a Colpensiones.

DECIMO: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

ONCE: Es cierto si así aparece acreditado con la respectiva documentación que se anexa en la demanda.

LAS PRETENSIONES

Me opongo a la totalidad de las pretensiones impetradas en la demanda, actuando en representación sustituta de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES "COLPENSIONES E.I.C.E.".

- Sobre la petición del traslado y sus efectos:

COLPENSIONES se opone a una eventual CONDENA y/o DECLARATORIA de INEFICACIA de traslado, entre tanto, NO esté demostrado que existe vicio en el consentimiento alguno, ni mucho menos menoscabo a derechos fundamentales pues era del interés del afiliado, captar una prestación económica a menos edad de la que se exige en el RPM, además, de beneficiarse de todas aquellas características propias del RAIS. COLPENSIONES no intervino en la decisión de la afiliada de su propio traslado.

Debe tenerse en cuenta además que la Corte Constitucional avalo la coexistencia de ambos regímenes, esto es el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Además, el mismo tribunal con sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, ya había considerado válida la pérdida del Régimen de Transición para las personas que se habían traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, excepto para las personas que tuvieran 15 años de servicios a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, pero como ya se mencionó, no es el caso de la actora.

- **Sobre la condena en costas:**

No DEBERÍA imponerse COSTAS procesales a COLPENSIONES pues actuó de conformidad con las exigencias de Ley, de buena fe y para nada intervino en la decisión libre y voluntaria de la afiliada de trasladarse de fondo y de régimen.

Página | 3

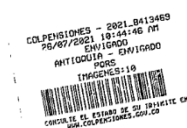
EXCEPCIONES PREVIAS

FALTA DE COMPETENCIA

Por cuanto como se verifica en la constancia de radicación de la solicitud del traslado de fondo, la cual fue radicada el 26 de julio de 2021, en el **Municipio de Envigado**, cuya jurisdicción sería la competente para conocer, tramitar y resolver el presente asunto de conformidad con el art. 11 del CPTSS.

Medellín,

SEÑORES:
ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES- COLPENSIONES
MEDELLIN
E.S.D



REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN
ASUNTO: TRASLADO DE FONDO DE PENSIONES DE FONDO PRIVADO (PORVENIR A COLPENSIONES)

PETICIONARIA: ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

CATALINA MARIA DURANGO VELÁSQUEZ, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con cédula de ciudadanía número 1.152.189.643, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional número 253.235, del Consejo Superior de la judicatura, obrando en calidad de apoderada de la señora ADRIANA MARIA OSPINA HENAO, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.662.901 mayor de edad y vecina de Medellín en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

Por lo anterior le solicito, respetuosamente, se ordene la terminación del proceso, de acuerdo a la consecuencia procesal de la declaratoria de la excepción previa presentada, tal como lo establece el Honorable Tribunal Superior de Medellín mediante Auto en el proceso: 05001-31-05-018-2020-00027-00 (O2-22-019), a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022), MP. Sandra María Rojas Manrique. **(ANEXO AUTO)**

Y como lo ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con radicación 25844 del 13 de septiembre de 2006, reiterada en la SL9013-2017:

"(...) conforme con el artículo 77 del C. P. del T. y la S. S., modificado por el 39 de la Ley 712 de 2001.(...), esa (...) etapa procesal, (...), no se trata de una oportunidad procesal para modificar, variar, enmendar o corregir la demanda,."

Y más concretamente, en sentencia con radicación 53375 del 2 de mayo de 2012, memoró que: "(...) la figura de la cosa juzgada por regla general se predica de la sentencia judicial y, excepcionalmente, de otras providencias, como aquellas que resuelven excepciones previas poniendo fin a un litigio (...)".

Página | 4

De lo anterior expuesto, educe la Sala que, la etapa de resolución de excepciones previas al interior de la audiencia consagrada en el artículo 77 del CPT y la SS, no es la oportunidad procesal para reformar la demanda,

Por todo lo anterior, le solicito decretar la excepción previa y como consecuencia de lo anterior, ordenar el archivo del proceso.

EXCEPCIONES DE MÉRITO

CARGA DINÁMICA DE LA PRUEBA – PARTICULARIDADES DEL CASO

El artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho fundamental al debido proceso, estableciendo entre otros, el hecho que, toda persona tiene derecho a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra.

La anterior premisa, fue regulada y desarrollada por el artículo 167 de la ley 1562 de 2012 (Código General del Proceso), precisando:

ARTÍCULO 167. CARGA DE LA PRUEBA. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias similares.

Desarrolla entonces el artículo 167, dos nociones para la demostración y consecución de las pruebas al interior del proceso: (i) individualista y liberal, donde es la parte quien alega el hecho a quien le compete su

demostración; (ii) facultativa, donde el Juez podrá invertir la carga de probar los supuestos de hechos que se alegan, atendiendo nociones de solidaridad y equidad, bajo las circunstancias particulares del caso concreto.

Página | 5

Así es que, la regla general es a la parte quien alega un supuesto de hecho es a quien le compete su demostración, sin embargo, está revestida de una excepción, y es qué bajo circunstancias concretas, el Juez de la Causa está facultado para invertir y exigir a la parte contra quien se alega o pretende demostrar el hecho, quien deberá llegar al interior del proceso, la prueba. Son 4 particularidades que permiten la inversión de la carga probatoria, y son estos:

1. Inmediatez con el objeto de debate.
2. Tener en su poder la prueba.
3. Inferioridad de la parte que busca la demostración del hecho.
4. Especialidad en la materia.

La sentencia C-086 de 2016 que analizó la constitucionalidad del art. 167 del Código General del Proceso, indicó:

7.4.- En lo concerniente a la configuración de la carga dinámica de la prueba debe decirse que atiende su inspiración teórica, fundada en los pilares de solidaridad, equidad (igualdad real entre las partes), lealtad y buena fe procesal, todos ellos reconocidos en la Carta Política de 1991, donde el principio "quien alega debe probar" cede su lugar al principio "quien puede debe probar". Su ejercicio por parte del juez es, en consecuencia, manifestación de una competencia plenamente legítima bajo el prisma de un Estado Social de Derecho.

En la regulación aprobada por el Legislador este decidió -también de manera deliberada y consciente- no fijar un catálogo cerrado de episodios en las cuales puede tener cabida la carga dinámica de la prueba. Por el contrario, dejó abierta esa posibilidad al juez, "según las particularidades del caso", para lo cual mencionó solo algunas hipótesis: (i) la posesión de la prueba en una de las partes, (ii) la existencia de circunstancias técnicas especiales, (iii) la previa y directa intervención en los hechos, (iv) el estado de indefensión o de incapacidad de una de las partes, "entre otras circunstancias similares".

Igualmente destaca la Corte constitucional que los eventos mencionados *"recogen en buena medida las reglas trazadas por la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la propia Corte Constitucional"*.

Además, agrega con nitidez que *"el Legislador facultó a los jueces para evaluar las circunstancias de cada caso y definir si se dan o no los supuestos genéricos para recurrir en ciertos casos a la carga dinámica de la prueba. Esta decisión resulta comprensible y completamente válida, no*

solo ante la dificultad para anticiparse a nuevas situaciones en una sociedad que presenta vertiginosos cambios –algunos tal vez inimaginables–, sino porque son los contornos de cada situación los que permiten evaluar si la igualdad entre las partes se ha visto o no comprometida y se requiere de la "longa manus" del juez para restablecerla."

Bajo las mismas reglas establecidas en el Código General del Proceso respecto del actuar del Juez y basar sus decisiones de conformidad con lo probado al interior del proceso, en material Laboral y de la Seguridad Social, el artículo 61 del Decreto Ley 2158 de 1948 (Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social), indica lo siguiente:

ARTICULO 61. LIBRE FORMACION DEL CONVENCIMIENTO. El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.

Descendiendo al caso concreto las premisas normativas antes referidas, podemos indicar y consecuentemente colegir, lo siguiente:

1. La afiliación y/o traslado de régimen del afiliado – demandante, y selección del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, ocurrió el 1º de octubre de 1994, en vigencia del Decreto Ley 663 del 02 de abril de 1993 (antes de 2009, año en el que se expide la Ley 1328 Por la cual se dictan normas en materia financiera, de seguros, del mercado de valores y otras disposiciones.) *"Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración."*, solo se exigía a las Sociedades Administradoras de Pensiones y Cesantías, atender el formulario con el lleno de los requisitos que para los efectos preveía la entonces Superintendencia Bancaria, a fin de demostrar la aceptación y consentimiento por parte de aquel.

Imponer cargas adicionales a las previstas en las leyes de la época se constituye en una situación de carácter imposible.

2. Es claro que el entendimiento entre el RPM y el RAIS sugiere que los afiliados sean debidamente asesorados dado que hay aspectos técnicos que los diferencian.

Sin embargo, esta regla no puede interpretarse como una situación universal que desplace las situaciones de cada caso particular y que además invierta la carga de la prueba sin mayor análisis que la naturaleza experta que tiene la administradora de pensiones.

Página | 7

Este contexto tampoco puede desconocer escenarios donde la expectativa pensional, la permanencia en el sistema, el silencio, la aceptación en el tiempo, la calidad del demandante y otros relacionados con las actividades financieras que ejecuta un usuario durante su vida laboral, le permitía escoger acertadamente el régimen pensional. Este último aspecto ha sido por ejemplo evaluado por la Corte Suprema tratándose de afiliaciones tácitas donde prevalecen las actividades, cotizaciones y movimientos financieros a lo largo de la vida laboral.

En razón de lo anterior, podemos colegir sin lugar a equivoco que, en lo atinente a la carga de probar los supuestos de hecho narrados en el acápite fáctico del escrito de demanda, estos deben de estar a cargo del demandante, pues la AFP cumplió con las atribuciones legales vigentes y aplicables para el momento de la afiliación de la parte actora, y en razón a los principios rectores de equidad y solidaridad, imponerle una carga adicional, más allá del formulario de afiliación, pues con ello se acentuaba el consentimiento y aceptación por el afiliado, sería una carga desproporcionada e IMPOSIBLE de cumplir.

INOPONIBILIDAD POR SER TERCERO DE BUENA FE

a) La inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante COLPENSIONES, en casos de ineficacia de traslado de régimen

Entendida la inoponibilidad (mecanismo protector), como la ineficacia de un acto o la ineficacia de una nulidad frente a terceros.

Es decir, que la ineficacia, resultaría inoponible **frente a terceros de buena fe** -como en este caso Colpensiones-, a la par que la inoponibilidad constituye un mecanismo protector del derecho a la seguridad jurídica, que en el caso de Colpensiones se consolida por el tiempo en que aquellos afiliados permanecieron en el RAIS.

Lo anterior, aunado a que la **seguridad jurídica** que se deriva de la inoponibilidad pretende proteger intereses patrimoniales de terceros que

tienen alcance frente al principio de sostenibilidad financiera del sistema y planeación de la reserva pensional.

La Sala de Casación Civil, ha definido la inoponibilidad como aquella que *"valora la confianza razonable de los terceros de buena fe en aquellos negocios que se presentan objetivamente como válidamente celebrados"*, raciocinio, que a su vez se deriva del principio de relatividad de los negocios jurídicos, es decir, que solo se producen efectos respecto de quienes voluntariamente participan de aquél; y COLPENSIONES no participó de dicho acto jurídico, luego no tiene por qué motivo alcanzarlo, ni mucho menos, afectarlo.

Página | 8

Precisamente, la jurisprudencia en la especialidad civil, indica que la inoponibilidad no requiere de la validez del negocio jurídico, muy por el contrario, **algo que es ineficaz entre las partes** (en este caso la afiliación al RAIS), se tenga como eficaz frente al tercero de buena fe (Colpensiones).

Así se ha dicho que:

"cuyo caso no le interesa que no lo alcancen los efectos de un negocio válido e incontrovertible entre las partes, sino todo lo contrario, esto es que se tenga como válido frente a su calidad de tercero un negocio jurídico que carece de eficacia entre los celebrantes".

Es decir, que la inoponibilidad frente a un negocio jurídico ineficaz, permite **que sus efectos se mantengan ante un tercero de buena fe** o, en otras palabras, que se mantengan los efectos de la afiliación al RAIS frente a Colpensiones, para lo cual, se probará el desmedro patrimonial que sufre la reserva pensional del RPM en caso de resultarle oponible la ineficacia de los traslados irregulares al RAIS.

B) Responsabilidad *sui generis* de las entidades de la seguridad social

Resulta también relevante indicar, que las entidades de Seguridad Social no solo se sujetan a la responsabilidad propia de los contratos de aseguramiento, sino que se ciñen a obligaciones de índole constitucional que trascienden como administradoras de un servicio público de seguridad social.

En este caso, la responsabilidad de las AFP por la ineficacia de un traslado, no sólo se deben enmarcar a reparar el daño individualmente sometido a consideración de un Juez, sino que debe tener alcance frente a los daños

indirectos que irradian o comprometen los derechos constitucionales de terceros, en razón de la reserva patrimonial de los pensionados y afiliados del RPM que se ven comprometidos con el desmedro que sufre la reserva pensional, y que si bien es cierto, la jurisprudencia ha indicado que al afiliado no le es atribuible y por ende no se le exige la equivalencia económica de los aportes que se devuelven del RAIS al RPM, no es menos cierto, que tal reparo económico lo debe asumir quien ha causado el daño y por virtud de la operancia de la inoponibilidad.

C) Realizar un juicio de proporcionalidad y ponderación

Toda vez que toda decisión judicial de declarar la ineficacia de traslado, repercute, **en que se crea de manera injustificada y desproporcionada una obligación** (con efectos patrimoniales) en cabeza de Colpensiones, quien administra los aportes de millones de pensionados y afiliados, y dicha medida para restablecer los derechos del afiliado, no pasaría el segundo criterio de la "necesidad", toda vez que **si existen otros medios menos lesivos** para mantener los derechos del afiliado, y es que quien se deba hacer cargo de las prestaciones económicas que se deriven de la ineficacia sea la AFP, quien ha administrado dichos recursos y ha generado los respectivos rendimientos, así mismo, al ponderar los bienes jurídicos en tensión.

De ahí que, poner en cabeza de COLPENSIONES dicha responsabilidad, tiene un impacto más lesivo para la sostenibilidad financiera del sistema, evaluando diferentes variables, tales como:

i) Que Colpensiones, siendo pública, es la única administradora del RPM, que alberga un mayor número de pensionados cuyas pensiones se reconocen con subsidio de las arcas del Estado, de forma tal, que se estaría solventado con estos recursos, el desmedro económico ocasionado por particulares (AFP privadas).

Finalmente, en caso de no aceptarse la tesis de la inoponibilidad frente al tercero de Buena Fe (COLPENSIONES), se debe evaluar por los jueces la proporcionalidad de la medida que se adopta con la ineficacia del traslado, y ponderar los bienes jurídicos en tensión, para adoptar otra medida, consistente en que sea la AFP quien asuma las cargas económicas, o que los dineros que se trasladen al RAIS, los devuelva conforme a un estudio actuarial que determine que con ellos se cubre en su integridad la prestación en los términos actuariales previstos para el RPM.

IMPROCEDENCIA PARA DECRETAR LA INEFICACIA DEL TRASLADO DE REGIMEN O INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN

La Circular 019 de 1998 emitida por La Superintendencia Financiera de Colombia estableció que cuando el afiliado decida trasladarse de régimen o de administradora, expresará su voluntad mediante el diligenciamiento del correspondiente formulario ante el empleador o ante la nueva entidad administradora, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el particular.

Es por ello que la solicitud realizada por la accionante a la AFP, fue realizada de manera directa y voluntaria ejerciendo su derecho a la libre elección de régimen, de conformidad con lo establecido en la Ley 100 de 1993, Artículo 13 Literal B. Por lo anterior, dicha AFP debió indicar los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisión, ya que al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES hoy en Liquidación allegaba el formulario de la nueva AFP escogida por el ciudadano indicando el cumplimiento de la solicitud de traslado.

Sin embargo, el 23 de octubre del 2015 se firmó el Decreto 2071 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el cual dice que las administradoras de pensiones deben proporcionar a los afiliados información completa de los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de decisiones en relación con su participación en cualquiera de los dos regímenes pensionales (de Prima Media o Ahorro Individual). Los afiliados podrán ir a cualquiera de las oficinas de Colpensiones y de los fondos privados o podrán ingresar a la página web donde hay información sobre los regímenes o pueden comunicarse telefónicamente para saber a dónde dirigirse y buscar la asesoría.

Lo anterior, teniendo en cuenta la Circular 016 de 2016 de la Superintendencia Financiera, mediante la cual se establecen los mecanismos para que tanto las AFP como Colpensiones realicen dicha asesoría a partir de 01/10/2016 a las mujeres de 42 años o mayores, y hombres de 47 años o mayores, desde dicha fecha los ciudadanos no se podrán trasladar de Régimen sin antes haber recibido dicha asesoría, por lo cual dicha restricción NO ES RETROACTIVA y comienza a regir a partir de la fecha dispuesta por la Superintendencia Financiera.

Una vez verificada la información que se registra en nuestras bases de datos y en la base de datos de Sistema de Información de Administradoras de Fondos de Pensiones - SIAFP, se visualiza que el demandante citado en la referencia figura válidamente afiliada a una Administradora de Fondos de Pensiones – AFP.

En cumplimiento a la Ley 797 de 2003, artículo 2º, literal E: "Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez".

Por lo anterior, frente a la pretensión de traslado de régimen, no sería procedente dado a que su poderdante se encuentra a menos de 10 años de adquirir el Derecho a su Pensión, ahora bien bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste en cualquier tiempo, conforme a los términos señalados en la **Sentencia Unificada 062 de 2010.**

Por otra parte, es necesario que se tenga en cuenta que solo podría la anulación del traslado efectuado hacia la Administradora de Fondos de Pensiones AFP y su retorno al Régimen de prima media, si:

- a) ***Su firma ha sido falsificada en el contrato de afiliación***, situación en la cual debe instaurar la respectiva acción penal por la presunta falsificación en documento (público o privado) ante la Fiscalía General de la Nación con el fin de determinar la veracidad o falsedad del documento, de conformidad con lo establecido en el Título IX Capítulo III de la Ley 599 de 2000 referente a los delitos contra la fe pública, en especial a la falsedad en documentos. Una vez la autoridad competente se pronuncie sobre el asunto, el ciudadano o la AFP respectiva podrán solicitar la anulación del traslado diligenciando los formularios de la Entidad y allegando copia del respectivo informe grafológico.
- b) ***El empleador lo afilió sin su consentimiento***: El formulario de afiliación no fue firmado por el afiliado.
- c) **Traslado de Régimen por sentencia SU 062 de 2010**: en el cumplimiento de las condiciones y requisitos señalados.

Sin embargo, ninguna de estas causales se vislumbra dentro del acápite de los hechos de la demanda y solo arguye la información inadecuada y poco veraz, las cuales deberán ser objeto de debate probatorio.

El demandante intentó su traslado del RAIS al RPM, faltándole menos de 10 años para el cumplimiento de la edad mínima.

De igual manera carece de los presupuestos exigidos en la **SU-130 de 2013** emanada de la Corte Constitucional.

Página | 12

Respecto del aspecto subjetivo de que trata el artículo 72 modificado por la L. 795 de 2003, art. 12 literal F y art. 97 modificada L. 795 de 2003 art. 23, sobre los deberes de informar a los afiliados ante una información inadecuada y poco veraz, aspectos que deben ser probados por la parte actora y sopesados por el Juez natural, como también ajenos a COLPENSIONES.

Es cierto que para la fecha de traslado el demandante plasmó su firma en el formulario y siendo este una persona legalmente capaz, debe entenderse que este acepto cada una de las condiciones ofrecidas, en consecuencia, no es dable años después venga a mostrar su inconformidad, más aún cuando tuvo la posibilidad de tener re-asesoría por parte del fondo privado que demuestra haber estado de acuerdo y satisfecha con lo que ese fondo privado le ofrecía.

Ahora bien, el Decreto 3800 de 2004, artículos 1º y 2º, inciso segundo y que a la letra dice:

Artículo 1º. Traslado de Régimen de Personas que les falte menos de diez años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez. De conformidad con lo señalado en el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, las personas a las que, a 28 de enero de 2004, les faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez, podrán trasladarse por una única vez, entre el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, hasta dicha fecha.

Artículo 2º. Casos de múltiple vinculación. En el evento en que las personas a que se refiere el artículo anterior se encuentren en situación de múltiple vinculación de régimen ante las administradoras del Sistema General de Pensiones, de conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Decreto 692 de 1994, deberán elegir el régimen al cual deseen estar vinculados.

Las personas a las que se refiere el artículo anterior, que no manifiesten su voluntad de afiliación de administradora o selección de régimen, se entenderán vinculadas a la entidad a la que se encontraran cotizando a 28 de enero de 2004 o a aquella que recibió la última cotización antes de dicha fecha. (Resalto mío).

La H. CORTE CONSTITUCIONAL en sentencia **C-1024 de 2004** se

manifestó en los siguientes términos:

"De suerte que, a juicio de esta Corporación, siendo el derecho al régimen de transición un derecho adquirido, no puede desconocerse la potestad reconocida a las personas previstas en las hipótesis normativas de los incisos 4º y 5º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de retornar en cualquier tiempo al régimen de prima media con prestación definida y, por lo mismo, hacer efectivo su derecho pensional con fundamento en las E disposiciones que le resulten más benéficas, conforme lo expuso esta Corporación en Sentencia C-789 de 2002 (M.P. Rodrigo Escobar Gil).

Página | 13

Por lo anterior, se declara exequible el artículo 2º de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, en el siguiente aparte previsto en el literal e), a saber:

"Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; (...)", exclusivamente por el cargo analizado en esta oportunidad y bajo el entendido que las personas que reúnen las condiciones del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y que, habiéndose trasladado al régimen de ahorro individual con solidaridad, no se hayan regresado al régimen de prima media con prestación definida, pueden regresar a éste -en cualquier tiempo-, conforme a los términos señalados en la sentencia C-789 de 2002".

Debe tenerse en cuenta además que la Corte Constitucional avalo la coexistencia de ambos regímenes, esto es el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad. Además, el mismo tribunal con sentencias C-789 de 2002 y C-1024 de 2004, ya había considerado válida la pérdida del Régimen de Transición para las personas que se habían traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, excepto para las personas que tuvieran 15 años de servicios a la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, pero como ya se mencionó, no es el caso de la actora.

Por último, la eventual afiliación de la demandante al Régimen de Prima Media y el traslado de los aportes al régimen en mención, dependen de la decisión favorable que previamente obtenga la accionante respecto de la pretensión de declaratoria de nulidad de la afiliación y traslado realizados al Régimen de Ahorro Individual.

A la fecha, el traslado efectuado al Régimen de Ahorro Individual tiene plena validez y respecto a la nulidad del contrato alegada por el interesado, deberá probarse en el desarrollo del proceso judicial.

Página | 14

Mientras no se verifique además que la demandante completa los requisitos de ley para acceder a la pensión de vejez tal como lo solicita con la presente demanda, esto es, que cumple con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003, no hay lugar al reconocimiento del derecho por parte de la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones por cuanto se presentó un traslado de Régimen de la accionante del RPM al RAIS.

PRESCRIPCIÓN

El derecho a adquirir una pensión en el Sistema General de Pensiones, debe advertir que se es imprescriptible el derecho en sí mismo, obedece a su naturaleza de prestación social de tracto sucesivo que se disfruta en forma vitalicia ligado a que como derecho conexo al mínimo vital y al derecho al trabajo, someter su reclamación a un período determinado afecta gravemente los derechos fundamentales del trabajador, pues se le niega la posibilidad de que en cualquier momento pueda solicitar y hacer valer en forma efectiva el reconocimiento y disfrute de aquel dinero que ha aportado al Sistema durante una larga vida laboral.

Luego, si la acción versa no sobre la adquisición o negación del derecho pensional, sino que está encaminada a obtener, como en este caso, la nulidad o ineficacia de la afiliación al sistema pensional en uno de los regímenes pensionales con el propósito de obtener no el derecho mismo sino un mayor valor de la mesada pensional no puede afirmarse que ésta sea imprescriptible, aun cuando sea materia exclusiva del sistema de seguridad social y se constituya con el fin de asegurar la entrega de la prestación pensional. Una cosa es el núcleo esencial del derecho pensional y otra los beneficios derivados del mismo.

En ese orden de ideas, que no puede identificarse el derecho pensional mismo con el acto jurídico de afiliación o traslado a un Régimen, porque es que la afiliación o traslado es el ejercicio de libertad de elección que hace el trabajador bien de pertenecer al régimen de prima media o bien de pertenecer al RAIS, regímenes legalmente reconocidos en nuestra legislación laboral y que si bien en un momento dado para determinados trabajadores afiliarse al RAIS puede ser económicamente desfavorable, no viola, no afecta el núcleo esencial del derecho pensional. Y es que la seguridad social se rige por principios de universalidad, solidaridad e

irrenunciabilidad, pero la imprescriptibilidad es un principio aplicable sólo al derecho pensional propiamente dicho.

Consecuentemente, **la prescripción** está llamada a prosperar, pues no se afecta la prestación pensional sino unos factores económicos derivados de la misma como ya dijimos el monto, se persiguen que con su traslado a prima media se le incremente el valor de su mesada pensional.

Página | 15

En cuanto al fundamento normativo para el fenómeno prescripción, como quiera que aquí se discute un asunto entre un usuario del sistema general de seguridad social y la entidad administradora de fondos pensionales, bien podríamos darle aplicación al art. 151 del CPT y SS que regula el término para prescribir las acciones- emanadas de los derechos sociales, pero de acuerdo al fundamento fáctico de la controversia que nos convoca es de tipo civil porque tienen relación directa con los elementos del consentimiento, pues se está invocando el error como causal de nulidad y entonces por ello considero que en aplicación del artículo-- 145 del CPT y SS es viable dar aplicación al artículo 1750 del Código Civil. Así las cosas, la acción rescisoria para perseguir la nulidad del acto jurídico de traslado en este caso se encuentra prescrita, teniendo en cuenta el término de la vinculación al régimen de ahorro individual y aquel en el que solicita su rescisión.

Finalmente, señala la Corte que la positivización de dicha figura jurídica no significa que su aplicación opere de manera automática, en perjuicio de la posibilidad de acceder a derechos laborales o pensionales que gozan del carácter de imprescriptibles, indicando que:

*"... la exigibilidad judicial del derecho a la pensión o a obtener su valor real es imprescriptible (**CSJ SL8544-2016**); por tanto, puede reclamarse en cualquier tiempo, siempre que se llenen los requisitos legales establecidos. Tal carácter deriva de la protección de los derechos adquiridos, la irrenunciabilidad del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de la Constitución Política, y de los mandatos de protección especial y solidaria hacia los sujetos en circunstancias de debilidad manifiesta", así concluyó erradamente la Corte que "...quien no pone en funcionamiento el aparato judicial para reclamar un derecho fundamental e indisponible como la pensión, así como los elementos indisolubles de su estructuración dentro de los tres años siguientes a su exigibilidad, se encuentra*

habilitado para requerirlo en cualquier momento a las entidades obligadas a su satisfacción.

Página | 16

En el caso que el Despacho resolviera acceder a las pretensiones del demandante, **solicito declarar la prescripción** de todas las acciones y derechos que hubieren sufrido este fenómeno en razón del paso del tiempo. Arts. 151 CPT y SS y art. 488 CST.

COMPENSACIÓN INDEXADA

De cualquier dinero ya percibido por el demandante respecto de las pretensiones incoadas por él y en caso de que prosperaran las pretensiones de la misma.

Solicito se tenga en cuenta los dineros que se le pago al demandante debidamente indexados por concepto del pago de la indemnización sustitutiva por vejez, por valor de 9.296.889, tal cual como lo confiesa en el hecho décimo cuarto de la demanda.

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, SEGUROS PREVISIONALES, RENDIMIENTOS Y AHORROS VOLUNTARIOS DEBIDAMENTE INDEXADOS

El inciso 2 del artículo 20 de la Ley 100 de 1993, como fuese modificado por el artículo 7 de la ley 797 de 2003, establece la distribución de los porcentajes de cotización de los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad, indicando y para los efectos pertinentes, el hecho que un 3% del ingreso base de cotización será destinado *"a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafín, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes"*.

Ahora bien, el artículo 39 del decreto reglamentario 656 de 1994, define a la cuota de administración de la que se apropia la administradora del régimen de ahorro individual como aquella que *"constituyen ingresos de las sociedades que administren fondos de pensiones las comisiones de administración a que tienen derecho"*. Determinado a continuación, de manera taxativa, sobre cuales conceptos se podía cobrar las comisiones correspondientes. Debe resaltarse el hecho que antes de la expedición de la ley 797 de 2003, y de conformidad con la Resolución 2549 de 1994, la cuota de administración en favor de estas entidades lo era del 3.5%.

Atendiendo el derrotero en virtud de señalar que parte del patrimonio autónomo de las entidades administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad se constituye con base en la cuota de administración que se cobra al afiliado al sistema general de pensiones,

el literal f del artículo 60 de la ley 100 de 1993, el cual destaca entre otras, las características del RAIS, establece:

*f. El patrimonio de las entidades administradoras garantiza el pago de la rentabilidad mínima de que trata el literal anterior y **el desarrollo del negocio de administración del fondo de pensiones.***

Página | 17

En ese orden de ideas, se colige sin mayor disquisición el hecho que la cuota de administración que cobra las administradoras del régimen de ahorro individual con solidaridad, es un INGRESO propio en favor de la generación de su patrimonio, todo ello, en virtud de la afiliación realizada por el cotizante obligatorio al sistema general de pensiones, debiendo destacarse el hecho, que de encontrarse que si la misma se declara INEFICAZ en virtud a una afectación de la selección libre y voluntaria del régimen pensional o por faltarle a un requisito de existencia o validez, bien sea determinado por el a quo, **estos dineros conjuntamente con sus rendimientos, generan un enriquecimiento sin justa causa a su favor** y de no trasladarse, constituiría desmedro de la Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES, pues ella, NUNCA, desde la selección inicial de afiliación al RAIS por parte del afiliado, tuvo en su haber, la destinación o administración de esas sumas dinerarias, **las cuales servirían para efectos de capitalizar el fondo de naturaleza común.**

Sobre la obligatoriedad de la devolución de los recursos previstos como cuotas de administración, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia reciente, con número de radicación 46292 expediente SL 17595 del 18 de octubre de 2017, Magistrado Ponente Fernando Castillo Cadena, ha sostenido:

"La administradora de pensiones del régimen de ahorro individual tiene el deber de devolver al sistema todos los valores que hubiere recibido con motivo de la afiliación del actor que fue anulada, con todos sus intereses y rendimientos que se hubieren causado".

Por consiguiente, también se solicita y con base en la misma jurisprudencia de la CSJ la devolución y traslado de todos los aportes, cotizaciones o gastos, SEGUROS PREVISIONALES Y AHORROS VOLUNTARIOS, rendimientos financieros y gastos de administración pertenecientes a la cuenta individual del actor, **debidamente INDEXADOS** a favor de Colpensiones.

BUENA FE DE COLPENSIONES

La institución que represento, NO PUEDE argumentar motivos de equidad y desconocer la LEGISLACIÓN VIGENTE ni la propia voluntad y decisión de la afiliada.

Como institución de carácter público, tiene que someterse al imperio de la Ley, pues los servidores públicos no pueden, según la Constitución

Política de Colombia, hacer sino lo que les está expresamente permitido, y entre esas cosas no está tomar decisiones en equidad. Lo contrario sería prevaricar.

IMPROCEDENCIA DE CONDENA EN COSTAS

Evidenciado en el hecho, de que su accionar jurídico administrativo se debe presumir de BUENA FE, a menos que se demuestre lo contrario, lo que conlleva a solicitar consecuentemente la imposibilidad de condenar en costas.

El Código General del Proceso, en su art. 365 faculta al juez para condenar en costas a la parte vencida, pero en consideración A LA CONDUCTA ASUMIDA por ella, que es una norma de carácter procesal de vigencia inmediata según Art. 40 de la L. 153/1887, en esos términos se ha pronunciado el Consejo de estado en sentencia del expediente 10918 de 1999 con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos Duque que a su vez cita otra sentencia del mismo ponente radicado 10775 y en la cual manifestó:

"es claro que el legislador no ha querido en este caso aplicar un criterio absoluto para determinar a cargo de quien están las costas del proceso y, por lo tanto, no es la ausencia de razón en la pretensión u oposición lo que hace sujeto de sanción a la parte sino su conducta abusiva que implique un desgaste innecesario para la administración y para la parte vencedora".

De otro lado, la Sala Laboral de la Corte, MP. Dr. GERMAN G. VALDES en sentencia del expediente 12736 del año 2000, se nota que prohija la tesis de la conducta asumida, y no el "pierde y paga" cuando dispuso:

No se condenará en costas al actor ni en el recurso extraordinario ni en las instancias, lo primero porque el recurso extraordinario no fue originado por él y lo segundo por ser esta decisión el resultado de una modificación de la jurisprudencia que sirvió de fundamento a las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, no tiene soporte una condena por este hecho, pues la entidad ha obrado de buena fe, y actúa según lo ordena la característica filosófica de sus funciones, y no puede ejecutar hechos prohibidos por las leyes y menos violar sus propios reglamentos, como en caso concreto de este proceso.

Además, COLPENSIONES no intervino para nada en la libre decisión de la afiliada de trasladarse de fondo al régimen privado o, luego COLPENSIONES no generó ni intervino para que se diera este proceso.

Se solicita a la señora Juez exonerar de costas a COLPENSIONES.

COMPENSACIÓN

Página | 19

Subsidiariamente si el despacho estima las pretensiones del demandante le solicito tener en cuenta las sumas de dinero que reciba o recibiére por pensión de vejez o indemnización sustitutiva en esa medida efectuar la compensación con lo que le pudiera corresponder.

DERECHO

Ley 100 de 1993 art. 12, 13, 59 y ss.; Código Civil 1502 y ss. Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; Arts. 151 CPT y SS y 488 CST; demás normas concordantes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Ley 100 de 1993 establece la responsabilidad de cada administradora frente al régimen que administra sea, COLPENSIONES el de prima media con prestación definida o el de ahorro individual tratándose de las administradoras privadas. En consecuencia, si la AFP privada comete yerros en la afiliación u omite el debido cumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, no tiene por qué afectar a **TERCEROS DE BUENA FE como COLPENSIONES**, para quien el acto jurídico del traslado en el que por demás no intervino COLPENSIONES, debe producir los efectos y ser la AFP privada la que en un todo por todo salga a responder por la culpa de haber desinformado al usuario del sistema financiero y social.

Es así como la AFP privada responde con su patrimonio por la omisión del deber de información que se demuestre haber incumplido, pero que, por el mismo es totalmente ajeno a COLPENSIONES, entidad que no tiene por qué ser llamada a responder patrimonialmente, menos aún si se trata de un fondo común que involucra dineros públicos.

Al momento de aceptar su ingreso al fondo la jurisprudencia ha definido que las administradoras de pensiones tienen la obligación de garantizar una afiliación libre y voluntaria, mediante la entrega de información suficiente y transparente que le permita al afiliado elegir entre las diferentes opciones, la que mejor se ajuste a sus intereses; por cuanto, no puede alegarse *«que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las Administradoras de Fondos de Pensiones dar*

cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito» (CSJ SL12136-2014).

Página | 20

Así mismo la Corte Suprema de Justicia en la sentencia SL 1688-2019, luego de realizar un recuento normativo, concluyó que "las AFP, desde su creación, tenían el deber de brindar información a los afiliados o usuarios del sistema pensional a fin de que estos pudiesen adoptar una decisión consciente y realmente libre sobre su futuro pensional".

De otra parte, se debe considerar que se ha desconocido el precedente constitucional al valerse de manera generalizada de la presunta ignorancia de la ley por parte de los afiliados, para considerarlos como parte débil y en consecuencia legos o inexpertos, desconociendo adicionalmente que el error de derecho no es justificable en los negocios jurídicos, menos para buscar un aprovechamiento pensional.

Es así como la posición de la CSJ **no es de recibo de la totalidad de los Magistrados de la misma**, por cuanto en reciente pronunciamiento dentro del radicado **68852**, el Magistrado Jorge Luis Quiroz aclaró su voto, que COLPENSIONES acoge en su defensa, y que en su tenor literal manifestó:

"... el acto de traslado, si bien impone un deber de información suficiente de parte de las administradoras, ello, per se, no exonera al afiliado del deber de concurrir suficientemente ilustrado a la escogencia de su régimen pensional, de la cual dependerán sus expectativas económicas y de plazo para acceder a la por vejez; como tampoco lo sustraen de la aplicación de la ley, para darle un tratamiento desigual, como si su capacidad para celebrar actos y contratos estuviera menguada frente a la definición de un acto de la mayor importancia, en la medida en que de su elección dependerán las condiciones de cubrimiento de las contingencias, amparadas por el sistema de seguridad social y en particular la de vejez. Agregó el magistrado Quiroz que la condición del promotor de la acción de nulidad merece una especial atención, pues "... es lo mismo que el ex ministro de hacienda que participó en la construcción de las reglas acuda a solicitar la nulidad, frente a la solicitud que haga un iletrado campesino cuya imposibilidad de leer lo haya llevado a un traslado de régimen y pretenda su nulidad por vicio del consentimiento.

En la Sentencia C-596 de 1997 la Corte Constitucional estudió una demanda dirigida contra la expresión "*al cual se encuentran afiliados*" contenida en el inciso segundo del art. 36 de la Ley 100 de 1993, la cual

se acusó de desconocer el principio de favorabilidad en materia laboral, colocar en situación desventajosa a las personas que se encontraban en el régimen de transición y violar el principio de irrenunciabilidad de los beneficios mínimos laborales, al respecto la Corte expresó:

Página | 21

"Justamente por cuanto los derechos a la seguridad social no se tienen por el simple hecho de ser persona humana, como si sucede con los derechos fundamentales o derechos de primera generación, para ser titular de ellos es necesario acreditar el cumplimiento de los requisitos que la ley, de manera general, impone para adquirirlos. Cuando, en vigencia de la ley que señala tales requisitos, estos llegan a cumplirse, se habla de derecho adquirido en materia de seguridad social. Cuando, por el contrario, durante el término de vigencia de la ley que prescribe tales condiciones, la persona que aspira a la titularidad de ellos está en vía de cumplirlas, se habla de expectativa de derecho. (...) Las consecuencias jurídicas en uno y otro supuesto son bien distintas: los derechos adquiridos, al tenor del artículo 58 la Carta Política, no pueden ser desconocidos por leyes posteriores; no así las simples expectativas de derecho." (Subrayado y negrilla fuera de texto original).

Posteriormente, a través de la providencia **C-789 de 2002**, la Corte Constitucional resolvió la demanda presentada por un ciudadano contra los incisos 4 y 5 del art. 36 de la Ley 100 de 1993. En la sentencia, la Corte precisó el alcance de derechos adquiridos y meras expectativas en materia pensional, indicando lo siguiente:

"La Sala Plena consideró que las disposiciones demandadas se ajustaban a la Constitución puesto que, en primer lugar, el derecho a obtener una pensión de acuerdo con el régimen de transición no es un derecho adquirido sino "apenas una expectativa legítima, a la cual decidieron renunciar voluntaria y autónomamente, para trasladarse al sistema de ahorro individual con solidaridad".

En segundo lugar, indicó que ni siquiera puede afirmarse que las normas acusadas frustren tal expectativa ya que sólo:

"se podría hablar de una frustración de la expectativa a pensionarse en determinadas condiciones y de un desconocimiento del trabajo de quienes se trasladaron al sistema de ahorro individual, si la condición no se hubiera impuesto en la Ley 100 de 1993, sino en un tránsito legislativo posterior, y tales personas se hubieran trasladado antes del tránsito legislativo".

Por último, precisó que:

"la protección constitucional a favor del trabajador, que le impide al legislador expedir normas que les permitan renunciar a ciertos beneficios

considerados como mínimos no se refiere a las expectativas legítimas, sino a aquellos derechos que hayan sido adquiridos por sus titulares o a aquellas situaciones que se hayan consolidado definitivamente en cabeza de sus titulares”,

Página | 22

Razón por la cual tal prohibición no aplica en este caso al tratarse de expectativas legítimas y no de derechos adquiridos”.

Adicionalmente, las sentencias **C-1024 de 2004**, y **SU-062 de 2010**, de la Corte Constitucional en materia de traslados, indican que nadie puede resultar subsidiado a costa de los recursos ahorrados de manera obligatoria por los otros afiliados a este esquema, dado que el régimen solidario de prima media con prestación definida se descapitalizaría. Así mismo, dentro de la aludida jurisprudencia la Corte recordó que:

"el derecho a la libre elección entre los distintos regímenes pensionales previstos en la ley, no constituye un derecho absoluto, por el contrario, admite el señalamiento de algunas excepciones que, por su misma esencia, pueden conducir al establecimiento de una diversidad de trato"

Como se observa, la Corte Constitucional destacó que el derecho a trasladarse **NO es absoluto** y debe atender criterios de sostenibilidad financiera y expectativas pensionales, acompasado ello con lo dispuesto en el **Acto Legislativo 01 de 2005**, relativo a la obligatoriedad de cuidar y asegurar la sostenibilidad del sistema pensional.

PRUEBAS

DOCUMENTAL:

Historia laboral.

Reclamación administrativa donde se constata la presentación en el Municipio de **Envigado**.

Auto del Tribunal Superior de Medellín 05001-31-05-018-2020-00027-00.

INTERROGATORIO DE PARTE:

Que personalmente realizaré a la demandante de presentarse dentro del trámite del proceso en fecha y hora que para el efecto se sirva fijar el despacho, de igual manera me reservo la facultad de contrainterrogar a los testigos.

DESCONOCIMIENTO DE DOCUMENTOS APORTADOS CON LA DEMANDA

Desde ya manifiesto al Despacho que desconozco los documentos aportados con la demanda y que provienen de terceros y que no han sido signados por ninguna parte, de acuerdo con el artículo 244 del CGP. Así mismo solicito para tramitar el desconocimiento de estos documentos, se tenga en cuenta lo establecido por el artículo 272 del CGP.

Página | 23

CONDENA EN COSTAS

De conformidad con el Artículo 392 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, solicito sea condenada en costas la parte demandante y se exonere a COLPENSIONES de costas procesales según el 365 del CGP, ord. 8º, y exonerar a Colpensiones toda vez que no participó en el acto que se declara ineficaz, y el sustento de la decisión guarda relación con una conducta desplegada por un tercero ajeno a la Administradora del Régimen de Prima Media.

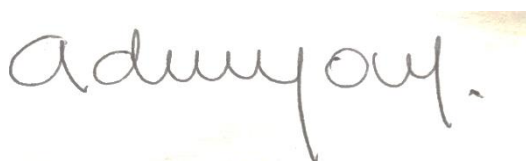
ANEXOS

Escritura pública Nro. 3-370 del 2 de septiembre de 2019, con sus soportes de Ley.

NOTIFICACIONES

La suscrita, en la carrera 55 No. 40 A – 20, oficina 1109.
Medellín.
Teléfono 6042611971.

Correo electrónico: adrioca80@hotmail.com



ADRIANA OCAMPO MAYA

T.P. 135035 del C.S.J.

Señor:

JUZGADO 18 LABORAL
Medellin

Referencia: SUSTITUCIÓN PODER

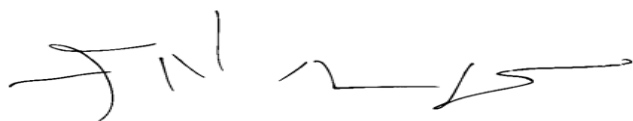
Radicado: 05001310501820210049600

Demandante: ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

Demandada: Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones

Fabio Andrés Vallejo Chanci, identificado como aparece al pie de mi firma, abogado en ejercicio con la tarjeta profesional número 198.214 del C.S. de la J., en mi calidad de representante legal para procesos de Colpensiones de la firma **PALACIO CONSULTORES S.A.S.**, con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP, respetuosamente manifiesto que por medio del presente escrito sustituyo poder en favor del (la) Dr. (a) **ADRIANA DEL ROSARIO OCAMPO MAYA** identificado(a) con cédula de ciudadanía número 32141257 de Medellín (Antioquia) y portador (a) de la tarjeta profesional de abogado número 135035 del Consejo Superior de la Judicatura, quien queda revestido(a) de las mismas facultades a mí conferidas.

Sírvase su señoría reconocerle personería jurídica, en los términos y para los fines de la presente sustitución de mandato.



Fabio Andrés Vallejo Chanci
C. C. 71.379.806
T.P. 198.214 del C. S. de la J

Acepto,



ADRIANA DEL ROSARIO OCAMPO MAYA
C. C. 32141257 de Medellín (Antioquia)
T.P. 135035 del C. S. de la J.



SALA QUINTA DE DECISIÓN

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: MARÍA JANED CORREA CORREA
Demandada: COLPENSIONES Y OTRA
Procedencia: JUZGADO DIECIOCHO LABORAL CIRCUITO MEDELLÍN
Providencia: AUTO INTERLOCUTORIO No.032 DEL 16 DE MAYO DE 2022
Radicado n.º: 05001-31-05-018-2020-00027-00 (O2-22-019)

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de mayo de dos mil veintidós (2022), en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto Legislativo No 806 del 04 de junio de 2020, y en consonancia con el artículo 10 del Acuerdo PCSJA20-11567 05/06/2020 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados **SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE** y **JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES** y **VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO**, en su carácter de magistrado sustanciador, una vez discutido y aprobado el respectivo proyecto de la decisión, procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la entidad pública accionada, dentro del proceso ordinario adelantado por MARÍA JANED CORREA CORREA contra el COLPENSIONES y PORVENIR S.A..

Se deja constancia que el respectivo proyecto de fallo fue puesto a consideración de la Sala y estando debidamente aprobado, se procede a dictar la siguiente decisión,

ANTECEDENTES

Por intermedio de vocero judicial pretende MARÍA JANED CORREA CORREA, que se declare la ineficacia del traslado que efectuó del RPMPD al RAIS, que siempre ha estado afiliada al RPMPD sin solución de continuidad, y se ordene la devolución de todos sus aportes, incluidos los rendimientos y los descuentos por cuotas de administración, la indexación, y las costas del proceso, con fundamento en que se afilió al otrora ISS para los riesgos IVM desde el año 1996, y que en el año 2008 se afilió a la AFP PORVENIR S.A., pero sin habersele suministrado la debida información sobre las implicaciones de tal acto.

Demanda que fue admitida mediante auto del 28 de enero de 2020 (doc. 01 pág. 22), y que una vez notificada (ibíd. pág. 49), fue contestada por COLPENSIONES a través de

poderhabiente judicial el 24 de febrero de 2020 (ibíd. pág. 50 y ss), oponiéndose a las pretensiones formuladas por carecer de fundamento fáctico y legal, al tiempo de proponer la excepción previa de “*FALTA DE AGOTAMIENTO DE LA RECLAMACIÓN ADMINISTRATIVA / FALTA DE COMPETENCIA*”, y las de mérito que rotuló: falta de legitimación en la causa, falta de causa, falta de interés en su vida pensional, buena fe de Colpensiones, mala fe de la parte actora, devolución de cuotas de administración, imposibilidad de condena en costas, prescripción, y compensación.

Por su parte, PORVENIR S.A., luego de notificada (ibíd. pág. 29), dio respuesta el 11 de marzo de 2020 (ibíd. pág. 89 y ss), oponiéndose a las pretensiones de la demanda, asuntando al efecto que no existe prueba alguna de la ineficacia deprecada, a la vez de proponer las excepciones de mérito que nominó: prescripción, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación, y buena fe.

El 19 de octubre de 2021, en la etapa de resolución de excepciones previas de la audiencia del artículo 77 del CPT y la SS, la *a quo* procedió a declarar fundada la excepción previa de falta de agotamiento de reclamación administrativa, concediendo a la parte demandante el término de un mes, para que agote la reclamación administrativa, y aportara constancia de ello al plenario, para lo cual dispuso la suspensión por un mes, para luego continuar con la referida diligencia.

Decisión que fue recurrida en reposición y en subsidio apelación por la apoderada judicial de la COLPENSIONES, quien al efecto arguyó que estando verificada la ausencia de reclamación administrativa previa frente a COLPENSIONES, debe declararse la terminación del proceso, en tanto ello es un requisito legal para abrir la vía jurisdiccional laboral contra una entidad de la administración pública, sin que pueda cumplirse con dicho requisito con posterioridad a la presentación de la demanda.

Reposición que fue denegada por la *a quo* en el mismo acto (min. 49:00), concediendo en subsidio el recurso de apelación propuesto.

CONSIDERACIONES

Frente al quid del asunto planteado, cumple advertir que en términos del artículo 65 del CPT y la SS, consagratorio de la procedencia del recurso de apelación contra los autos proferidos en primera instancia, en su numeral 3° señala que es apelable el auto “(...) *que decida sobre excepciones previas*.”.

En orden a resolver de fondo el asunto, vale indicar que la prosperidad de la excepción previa de falta de jurisdicción o competencia por falta de agotamiento de la reclamación administrativa, no fue objetada por la parte actora, toda vez que el apoderado judicial guardó silencio frente a la misma (min. 41:30), por lo que de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66 A del C.P.L. y S.S., ello no podrá ser materia de estudio en esta instancia, limitándose el problema jurídico en determinar los efectos de la declaratoria de dicho medio exceptivo dilatorio.

A este respecto, ha de partirse de lo consagrado en el artículo 101 del CGP, que regula el trámite y efectos que deben darse a las excepciones previas, y norma que en su numeral 2º dispone:

“2. El juez decidirá sobre las excepciones previas que no requieran la práctica de pruebas, antes de la audiencia inicial, y si prospera alguna que impida continuar el trámite del proceso y que no pueda ser subsanada o no lo haya sido oportunamente, declarará terminada la actuación y ordenará devolver la demanda al demandante.

Cuando se requiera la práctica de pruebas, el juez citará a la audiencia inicial y en ella las practicará y resolverá las excepciones.

Si prospera la de falta de jurisdicción o competencia, se ordenará remitir el expediente al juez que corresponda y lo actuado conservará su validez.

Si prospera la de compromiso o cláusula compromisoria, se decretará la terminación del proceso y se devolverá al demandante la demanda con sus anexos.

Si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda.

Cuando prospere alguna de las excepciones previstas en los numerales 9, 10 y 11 del artículo 100, el juez ordenará la respectiva citación. (...)” (subrayas propias de la Sala)

Como se advierte, la consecuencia procesal de la declaratoria de una excepción previa depende de las características propias de cada excepción, más concretamente, de si la regulación de la excepción previa permite que la misma pueda ser subsanada oportunamente, o si por el contrario, implican la terminación del proceso.

Así, a manera de ejemplo, cuando la excepción previa refiere a la integración de la litis o al debido trámite procesal, el proceso debe continuar con la condigna citación de las personas que deben comparecer al juicio o imprimiendo el trámite legalmente pertinente; pero a *contrario*

sensu, en el caso de las excepciones que impiden la presentación de la demanda ante la autoridad judicial que la tramita, la consecuencia es la terminación del proceso y la remisión al juez competente (falta de jurisdicción o competencia), o de no haber juez competente (compromiso o cláusula compromisoria), la terminación del proceso y la devolución de la demanda con sus anexos.

En esa misma dirección, ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como en la sentencia con radicación 25844 del 13 de septiembre de 2006, reiterada en la SL9013-2017, lo siguiente:

“(...) conforme con el artículo 77 del C. P. del T. y la S. S., modificado por el 39 de la Ley 712 de 2001.(...), esa (...) etapa procesal, (...), no se trata de una oportunidad procesal para modificar, variar, enmendar o corregir la demanda,”

Y más concretamente, en sentencia con radicación 53375 del 2 de mayo de 2012, memoró que: *“(...) la figura de la cosa juzgada por regla general se predica de la sentencia judicial y, excepcionalmente, de otras providencias, como aquellas que resuelven excepciones previas poniendo fin a un litigio (...)”*.

De lo anterior expuesto, educe la Sala que, la etapa de resolución de excepciones previas al interior de la audiencia consagrada en el artículo 77 del CPT y la SS, no es la oportunidad procesal para reformar la demanda, visto que para tal momento ya ha vencido la oportunidad para ello de conformidad con el artículo 28 ibid. En igual sentido, se desprende que la mentada audiencia tampoco constituye una etapa procesal para que la parte activa complemente, enmiende, subsane o corrija los requisitos formales de la demanda, toda vez que tal oportunidad se restringe a la devolución de la demanda consagrada mismo artículo en cita.

En adición, se extrae de los precedentes judiciales en cita, que al declararse probada una excepción previa, tal decisión tiene efectos de cosa juzgada, de suyo que el juez no puede posteriormente proferir una decisión en sentido diferente, precisamente para evitar que el juzgador que declara la falta de jurisdicción o competencia para conocer una demanda, luego proceda a declararse competente para conocer la demanda por solicitud de las partes o alegando un hecho nuevo.

Razones suficientes que permiten armonizar las consecuencias de la declaratoria de una excepción previa, con una de las características básicas de cualquier proceso judicial, a saber, que el trámite del proceso se ha de surtir a través de etapas procesales preclusivas que se van clausurando una vez concluidas y sobre las cuales no debe volverse a revivir la discusión.

Corolario de lo expuesto, para el *sub lite* se tiene que, un vez la *a quo* declaró probada la excepción previa de falta de jurisdicción o competencia por falta de agotamiento de la reclamación administrativa, no podía proceder a remitir la demanda a otro juez que estimare competente, en razón a que no existe ningún juez competente para asumir tal demanda, por qué según en el artículo 6º del CPT y de la SS la competencia para resolver sobre lo pretendido aún estaba radicada en la entidad pública demandada, y hasta tanto no se efectuara la respectiva reclamación, no se puede activar por la demandante la jurisdicción en su especialidad laboral.

Es decir, que como no existía un juez competente para hacer remisión del proceso, analógicamente con lo dispuesto para el compromiso o la cláusula compromisoria, la juez debió proceder a la terminación del proceso con la devolución de la demanda y sus anexos, con lo cual la parte activa podría cumplir con el requisito de procedibilidad para acceder a la jurisdicción y demandar nuevamente a COLPENSIONES, entidad que estima es la responsable para resolver sobre los derechos laborales pretensos.

Es de anotar en derredor de este punto, que tampoco era procedente que la juez procediera simplemente a retirar de la litis a la entidad pública demandada, ya que así se estaría desconociendo el derecho de acción de la parte actora, como facultad de demandar a quien estime debe responder por los derechos que se reclaman.

En adición, se itera que la audiencia del artículo 77 del CPT y la SS no es una oportunidad procesal “*para modificar, variar, enmendar o corregir la demanda*” (SL9013-2017), y por ello para el momento procesal en que se profirió tal decisión de declarar probada la excepción previa de falta de jurisdicción o competencia por falta de agotamiento de la reclamación administrativa, ya había vencido la oportunidad procesal para reformar la demanda, o para devolver la misma con miras a que se modificaran, variaran, enmendaran o corrigieran los requisitos formales de la misma, de lo que se sigue que, una vez declarada la excepción previa en comento, lo procedente era declarar la terminación del proceso con la devolución de la demanda y sus anexos, para que así pudiera la parte demandante presentar nuevamente la demanda, esta vez sí, de conformidad con los presupuestos formales de la misma.

Finalmente, estima pertinente la Sala memorar que “*las causales de suspensión y de interrupción procesales son taxativas*” (CSJ-SL Auto del 17/10/07 rad. 32634), bien sea por impedimento o recusación al juez (art. 145 CGP), por prejudicialidad o por acuerdo entre las partes (art. 161 CGP), o cualquier otra causa legal, de suyo que no le era dable a la juez crear causales de suspensión del proceso fuera de las previstas en la Ley, al decretar la suspensión

del proceso mientras corría el término que le otorgó a la parte actora para que cumpliera tardíamente con los requisitos formales de la demanda.

En razón a las consideraciones precedentes, se impone entonces revocar la decisión de primera instancia, únicamente en cuanto suspendió el trámite procesal para que se subsanaran los requisitos formales de la demanda, para en su lugar, declarar la terminación del proceso con la devolución de la demanda y sus anexos a la parte demandante.

Costas en esta instancia a favor de la COLPENSIONES y en contra de la demandante, por haber sido resuelto favorablemente el recurso de alzada propuesto por el extremo pasivo y de conformidad con lo dispuesto en numeral 3º del artículo 365 del CGP, fijándose como agencias en derecho la suma de \$500.000 equivalentes a medio (1/2) SMMLV.

Como quiera que, el *a quo* se abstuvo de pronunciarse sobre las costas de primera instancia, en atención a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 287 del CGP, se declarará que las mismas correrán a cargo de la demandante y a favor de COLPENSIONES, debiendo la *a quo* proceder a tasar las agencias en derecho que correspondan.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el proveído dictado por el JUZGADO DIECIOCHO LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN en audiencia del 19 de octubre de 2021, dentro del proceso ordinario laboral promovido por MARÍA JANED CORREA CORREA en contra de la COLPENSIONES y PORVENIR S.A., únicamente en cuanto concedió a la parte demandante el término de un mes para que acreditara el agotamiento de la reclamación administrativa y dispuso la suspensión del proceso por el mismo lapso de tiempo, para en su lugar, **DECLARAR** la terminación del proceso con la devolución de la demanda y sus anexos a la parte demandante, según y conforme lo expuesto en la parte considerativa de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en **COSTAS** en segunda instancia a favor del COLPENSIONES y en contra de MARÍA JANED CORREA CORREA, fijándose como agencias en derecho la suma

de \$500.000. Las costas de primera instancia correrán a cargo de la demandante y a favor de la COLPENSIONES, tásense.

Devuélvanse las diligencias al juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE POR ESTADO,

Se declara surtida la presente audiencia y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

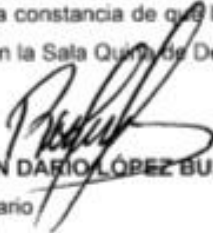


JULIO RAFAEL TORDECILLA PAYARES
Magistrado



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

CONSTANCIA SECRETARIAL
Se deja constancia de que las anteriores firmas, corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario

Certifico: Que la decisión anterior fue notificada por ESTADOS n.º 84 fijados hoy en la secretaría de este Tribunal a través de la página Web a las 8:00 a.m.
Medellín, 17 de mayo de 2022

Secretario

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 julio/2022
ACTUALIZADO A: 01 julio 2022

INFORMACIÓN DEL AFILIADO

Tipo de Documento:	Cédula de Ciudadanía	Fecha de Nacimiento:	24/01/1967
Número de Documento:	43662901	Fecha Afiliación:	24/05/1988
Nombre:	ADRIANA MARIA OSPINA HENAO	Correo Electrónico:	
Dirección:		Ubicación:	
Estado Afiliación:	Trasladado		

RESUMEN DE SEMANAS COTIZADAS POR EMPLEADOR

En el siguiente reporte encontrará el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o de sus propias cotizaciones como trabajador independiente, es decir, las que han sido cotizadas desde enero de 1967 a la fecha. Recuerde que la Historia Laboral representa su vida como trabajador, la que usted ha construido mes a mes y año a año.

[1]Identificación Aportante	[2]Nombre o Razón Social	[3]Desde	[4]Hasta	[5]Último Salario	[6]Semanas	[7]Lic	[8]Sim	[9]Total
2016112226	CARNICERIA DE GUILLE	24/05/1988	11/10/1988	\$30.150	20,14	0,00	0,00	20,14
2018210968	VISION MUNDIAL INTER	18/07/1990	14/01/1994	\$254.730	182,43	0,00	0,00	182,43
					[10] TOTAL SEMANAS COTIZADAS:			202,57
					[11] SEMANAS COTIZADAS CON TARIFA DE ALTO RIESGO(INCLUIDAS EN EL CAMPO 10 * "TOTAL SEMANAS COTIZADAS"):			0,00

RESUMEN DE TIEMPOS PÚBLICOS NO COTIZADOS A COLPENSIONES

El siguiente resumen **INFORMATIVO** refleja los periodos laborados en el sector público y no cotizados al ISS hoy Colpensiones.

[12]Identificación Empleador	[13]Nombre o Razón Social	[14]Desde	[15]Hasta	[16]Último Salario	[17]Semanas	[18]Lic	[19]Sim	[20]Total
NO REGISTRA INFORMACIÓN								
						[21]TOTAL SEMANAS REPORTADAS:		

RESUMEN TIEMPO PÚBLICO SIMULTÁNEO CON TRADICIONAL (67 - 94) Y POST 94

El siguiente resumen refleja los periodos laborados que presentan simultaneidad, es decir aquellos en los que usted prestó servicios para varios empleadores en el mismo periodo de tiempo.

[22]Desde	[23]Hasta	[24]Semanas Simultáneas
NO REGISTRA INFORMACIÓN		
		[25] TOTAL SEMANAS SIMULTÁNEAS:

[26]TOTAL SEMANAS (cotizadas[10] + reportadas tiempos públicos[21] - simultáneos[25])	202,57
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

Si usted laboró en entidades del sector público y estas entidades no cotizaron a pensiones al Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, es posible que estos periodos no se vean reflejados en su reporte de Historia Laboral. De ser así, puede radicar la solicitud de inclusión de dichos periodos allegando la certificación Electrónica de Tiempos Públicos - CETIL expedida por su empleador, conforme al Decreto 726 de 2018 expedido por el Ministerio de Trabajo.

* Los tiempos públicos tenidos en cuenta para la liquidación de una prestación económica decidida con anterioridad al 26/09/2017, no se visualizarán en el reporte de Historia Laboral.

Si ha trabajado en varias empresas al mismo tiempo, sólo se contabilizará en el total de semanas uno de los periodos y el salario base será la suma de lo cotizado, sin exceder el máximo asegurable al momento de solicitar el reconocimiento pensional.

Las semanas de los periodos de abril y mayo de 2020 con observación "Pago Decreto 558/2020 COVID 19", serán consideradas en el reconocimiento pensional para: Cumplir requisito de las 1300 semanas, Cuando se trate de una pensión de vejez con 1 SMLMV y para el otorgamiento de las pensiones de invalidez y muerte.

COLPENSIONES Nit 900.336.004-7
REPORTE DE SEMANAS COTIZADAS EN PENSIONES
PERIODO DE INFORME: Enero 1967 julio/2022
ACTUALIZADO A: 01 julio 2022

C 43662901 ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS ANTERIORES A 1995

Este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

[27] Identificación Empleador	[28] Nombre o Razón Social	[29] Ciclo Desde	[30] Ciclo Hasta	[31] Asignación Básica Mensual	[32] Días Rep.	[33] Observación
2016112226	CARNICERIA DE GUILLERMO ESC	24/05/1988	11/10/1988	\$ 30.150	141	Pago aplicado al periodo declarado
2018210968	VISION MUNDIAL INTERNACIONA	18/07/1990	31/05/1991	\$ 79.290	318	Pago aplicado al periodo declarado
2018210968	VISION MUNDIAL INTERNACIONA	01/06/1991	30/09/1991	\$ 99.630	122	Pago aplicado al periodo declarado
2018210968	VISION MUNDIAL INTERNACIONA	01/10/1991	30/06/1993	\$ 165.180	639	Pago aplicado al periodo declarado
2018210968	VISION MUNDIAL INTERNACIONA	01/07/1993	14/01/1994	\$ 254.730	198	Pago aplicado al periodo declarado

DETALLE DE PAGOS EFECTUADOS A PARTIR DE 1995

En el siguiente reporte encontrará el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

[34] Identificación Aportante	[35] Nombre o Razón Social	[36] RA	[37] Período	[38] Fecha De Pago	[39] Referencia de Pago	[40] IBC Reportado	[41] Cotización Pagada	[42] Cotización Mora Sin Intereses	[43] Nov.	[44] Días Rep.	[45] Días Cot.	[46] Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

DETALLE DE PERIODOS REPORTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO QUE NO COTIZARON AL ISS HOY COLPENSIONES

En el siguiente resumen encontrará el detalle por días, de los ciclos laborados en entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones.

[47] Identificación Empleador	[48] Nombre o Razón Social	[49] RA	[50] Ciclo	[51] Fecha de Pago	[52] Referencia de Pago	[53] Asignación Básica Mensual	[54] Cotización Pagada	[55] Cotización Mora Sin Intereses	[56] Nov.	[57] Días Rep.	[58] Días Cot.	[59] Observación
NO REGISTRA INFORMACIÓN												

C 43662901 ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

LECTURA DEL REPORTE DE LA HISTORIA LABORAL UNIFICADO

Resumen de Semanas Cotizadas por Empleador: este reporte contiene el total de semanas cotizadas a través de cada uno de sus empleadores o como trabajador independiente, es decir las que se han cotizado desde enero de 1967 a la fecha.

1. **Identificación aportante:** número que identifica al aportante según el sistema al que pertenece. Hasta diciembre de 1994 número patronal y a partir de 1995, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.
2. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
3. **Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
4. **Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
5. **Último salario:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta el 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado y para las cotizaciones a partir de 1995 corresponde al salario reportado en el periodo desde-hasta.
6. **Semanas:** total de semanas correspondientes al periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
7. **Licencias (Lic.):** refleja las licencias no remuneradas, es decir periodo no laborado ni remunerado. Este valor es descontado del total de semanas del periodo cotizado.
8. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas cotizadas de manera simultánea a través de dos o más aportantes.
9. **Total:** es el total de semanas cotizadas del periodo, menos las licencias no remuneradas y el tiempo cotizado de manera simultánea.
10. **Total de Semanas Cotizadas:** corresponde al total general de semanas cotizadas a la fecha de generación del reporte.
11. **Total de Semanas Cotizadas Alto Riesgo:** corresponde al total general de semanas cotizadas por tarifa de alto riesgo. Este total se encuentra incluido en el total de semanas cotizadas (campo 10 Total de Semanas Cotizadas.)

Resumen de Tiempos Públicos no Cotizados a Colpensiones: este reporte es informativo y refleja el total de semanas reportadas y laboradas en el sector público, los cuales no fueron cotizados al ISS hoy Colpensiones.

12. **Identificación empleador:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
13. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
14. **Desde:** corresponde a la fecha inicial del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
15. **Hasta:** corresponde a la fecha final del aporte realizado, según lo reportado por la entidad certificadora.
16. **Último salario:** corresponde al último salario reportado por la entidad certificadora.
17. **Semanas:** corresponde a las semanas del periodo desde – hasta, sin descontar el tiempo de licencias y simultáneos.
18. **Licencias (Lic.):** corresponde a las interrupciones laborales no remuneradas, reportadas por la entidad certificadora.
19. **Simultáneos (Sim.):** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
20. **Total:** es el total de semanas reportadas del periodo, menos las licencias no remuneradas campo (7. Licencias (Lic.)).
21. **Total de Semanas Reportadas:** corresponde al total general de semanas reportadas a la fecha de generación del reporte.

Resumen Tiempo Público Simultáneo con Tradicional (67 - 94) Y Post 94: este reporte refleja el total de semanas laboradas simultáneamente entre el sector público y privado para los tiempos tradicionales (67-94) y Post 94.

22. **Desde:** corresponde a la fecha inicial de la simultaneidad.
23. **Hasta:** corresponde a la fecha final de la simultaneidad.
24. **Semanas simultáneas:** cantidad de semanas laboradas de manera simultánea, es decir a través de dos o más empleadores en el mismo periodo de tiempo.
25. **Total Semanas Simultáneas:** corresponde a la sumatoria total de semanas laboradas simultáneamente a la fecha de generación del reporte.
26. **Total Semanas:** corresponde a total semanas cotizadas más(+) total semanas reportadas menos(-) total semanas simultáneas reportadas y cotizadas a la fecha de generación del reporte.

Detalle de pagos efectuados anteriores a 1995: este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas hasta el 31 de diciembre de 1994.

27. **Identificación Empleador:** para los periodos anteriores a 1995 corresponde al número Patronal.
28. **Nombre o razón Social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).

C 43662901 ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

29. **Ciclo Desde:** corresponde a la fecha de inicio del periodo de cotización.
30. **Ciclo Hasta:** corresponde a la fecha final del periodo de cotización.
31. **Asignación Básica Mensual:** salario reportado por el aportante. Para las cotizaciones efectuadas hasta 31 de diciembre de 1994, corresponde al último salario reportado.
32. **Días Rep.:** número de días trabajados y reportados por el aportante para el periodo registrado.
33. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

Detalle de pagos efectuados a partir de 1995: este reporte contiene el detalle de las semanas cotizadas a partir de enero de 1995 en adelante.

34. **Identificación del aportante:** número que identifica al empleador o trabajador independiente (NIT, Cédula de Ciudadanía, Cédula de Extranjería, etc.).
35. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social del aportante (empleador o trabajador independiente).
36. **RA:** indica si existe un registro de afiliación o relación laboral.
37. **Período:** año y mes al que corresponde el periodo cotizado.
38. **Fecha de pago:** fecha en que fue realizado el aporte.
39. **Referencia de pago:** número de registro del pago realizado (Calcomanía o Sticker o referencia de pago PILA).
40. **IBC Reportado:** es el salario (Ingreso Base de Cotización) declarado por el empleador o trabajador independiente, para el pago de la cotización.
41. **Cotización:** valor del aporte efectuado según el salario declarado en cada uno de los periodos.
42. **Cotización mora sin intereses:** es el dinero que el aportante adeuda por el periodo, sin incluir los intereses.
43. **Novedad(Nov.):** campo que indica con la letra "R", la novedad de Retiro reportada por el empleador.
44. **Días reportados:** número de días trabajados y reportados por el aportante en cada uno de los periodos.
45. **Días cotizados:** corresponde al número de días equivalentes al valor de la cotización pagada.
46. **Observación:** indica en que situación o estado se encuentra su periodo de cotización reportado.

Detalle de periodos reportados por entidades del sector público que no cotizaron al ISS hoy Colpensiones: este reporte contiene el detalle de las semanas reportadas por las entidades certificadoras.

47. **Identificación del aportante:** número que identifica la entidad empleadora con la cual tuvo relación laboral en el sector público.
48. **Nombre ó razón social:** nombre o razón social de la entidad empleadora.
49. **RA:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
50. **Ciclo:** año y mes al que corresponde el periodo reportado.
51. **Fecha de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
52. **Referencia de pago:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará vacío.
53. **Asignación Básica Mensual:** es el valor de la asignación básica mensual reportado por la entidad certificadora. En este reporte no se verán reflejados los demás factores salariales reportados por la entidad certificadora, sin embargo serán tenidos en cuenta al momento de la decisión de la prestación económica a que haya lugar.
54. **Cotización pagada:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
55. **Cotización mora sin intereses:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
56. **Novedad (Nov.):** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
57. **Días reportados (Rep.):** número de días reportados por la entidad certificadora en cada uno de los periodos.
58. **Días cotizados:** para el sector público esta información no es reportada por parte de la entidad certificadora. El campo siempre estará en cero (0).
59. **Observación:** indica si el periodo se encuentra simultáneo con otro empleador. En caso en que se encuentre vacío, indica que el campo no es simultáneo.

Defensoría del Consumidor Financiero

Dirección: Carrera 11 A Nº 96 – 51 Of. 203 Bogotá.

Horario de atención: 8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Teléfonos: (1) 6108161 - (1) 6108164.

Correo Electrónico: defensoriacolpensiones@legalcrc.com

Agradecemos su confianza recordándole que estamos para servirle. Este reporte esta sujeto a revisión y verificación por parte de Colpensiones.



Consultorías Jurídicas

Medellín,

**SEÑORES:
ADMINISTRADORA COLOMBIA DE PENSIONES- COLPENSIONES
MEDELLIN
E.S.D**

COLPENSIONES - 2021-8413469
26/07/2021 10:44:46 AM
ENVIGADO
ANTIOQUIA - ENVIGADO
PQRS
IMAGENES:10
CONSULTE EL ESTADO DE SU PETICIÓN EN
WWW.COLPENSIONES.GOV.CO

**REFERENCIA: DERECHO DE PETICIÓN
ASUNTO: TRASLADO DE FONDO DE PENSIONES DE FONDO PRIVADO (PORVENIR A COLPENSIONES)**

PETICIONARIA: ADRIANA MARIA OSPINA HENAO

CATALINA MARIA DURANGO VELÁSQUEZ, mayor de edad, vecina de Medellín, identificada con cédula de ciudadanía número 1.152.189.643, abogada en ejercicio portadora de la tarjeta profesional número 253.235, del Consejo Superior de la judicatura, obrando en calidad de apoderada de la señora **ADRIANA MARIA OSPINA HENAO**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 43.662.901 mayor de edad y vecina de Medellín en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución política de Colombia y los artículos 9 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, e igualmente en convenidos internacionales suscritos por Colombia, entre los cuales se encuentra la declaración universal de los derechos humanos (art.8) pacto internacional de derechos civiles y políticos (art.16) y convenio IV de Ginebra (Art. 52) y desarrollado legalmente mediante decreto 01 de 1994, y 9 del C.C.A, fundamento los siguientes:

HECHOS:

PRIMERO: La señora **ADRIANA MARIA OSPINA HENAO** identificada con la cédula de ciudadanía Nro 43.662.901, nació el 24 de enero de 1967 con la edad de 54 años, se encuentra afiliada al fondo privado de pensiones Porvenir.

SEGUNDO: Desde el año 1998-05-01 se encuentra afiliada como cotizante en el fondo privado Porvenir.

TERCERO: A mi prohijada cuando realizo dicha afiliación al fondo de pensiones porvenir, no explicados claramente sus derechos, ni efectos jurídicos que esta acción conllevaría, sin darle la información adecuada.

CUARTO: En vista de esta situación, y con fundamento en las sentencias C-789 de 2002 Y C- 1024 de 2004 la señora **OSPINA HENAO** reúne los requisitos para que le sea aprobado el traslado de fondo de pensiones de porvenir a Colpensiones.

FUNDAMENTOS DE DERECHOS

En Colombia existen dos regímenes pensionales: uno es del régimen de prima media-RPM que pertenece al sector público y es administrado por Colpensiones, y el otro es el régimen de ahorro individual RAIS, que pertenece al sector privado y es administrado por fondos de pensiones como porvenir, protección etc. El literal e) del artículo 13 de la ley 100 de 1993, permite a los afiliados a estos regímenes trasladarse de uno a otro, pero solo podrán realizar dicho traslado una vez cada cinco (5) años. Aunado a lo anterior, la seguridad social se erige en nuestro ordenamiento jurídico como un derecho constitucional a cuyo cumplimiento se compromete el estado, según se sigue de la lectura del artículo 48 superior, el cual prescribe lo siguiente: "Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. La protección que le otorga el ordenamiento constitucional al derecho a la seguridad



Consultorías Jurídicas

social se complementa y fortalece por lo dispuesto en el ámbito internacional pues son varios los instrumentos internacionales que reconocen el derecho de las personas a la seguridad social.

PETICION

Solicito de manera comedida efectuar y aprobar el traslado de fondo de pensión de la señora ADRIANA MARIA OSPINA HENAO identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 43.662.901 de porvenir al régimen de Prima Media con prestación definida, administrado por Colpensiones.

ANEXOS

Con el presente escrito como anexos presento los siguientes documentos:

- 1- Copia de la cédula de la señora ADRIANA MARIA OSPINA HENAO
- 2- Copia de la tarjeta profesional de abogada
- 3- Copia de la cédula de ciudadanía de la abogada
- 4- Poder debidamente otorgado.

NOTIFICACIONES

Carrera 76 A Nro. 53-35 apto 809 torre 3 Urbanización jardín de Colores P.H, correo electrónico: consultoriasjuridicas.sas@gmail.com, teléfono: 3182388717

Cordialmente,


CATALINA MARIA DURANGO VELÁSQUEZ
CC. 1.152.189.643
T.P 253.235